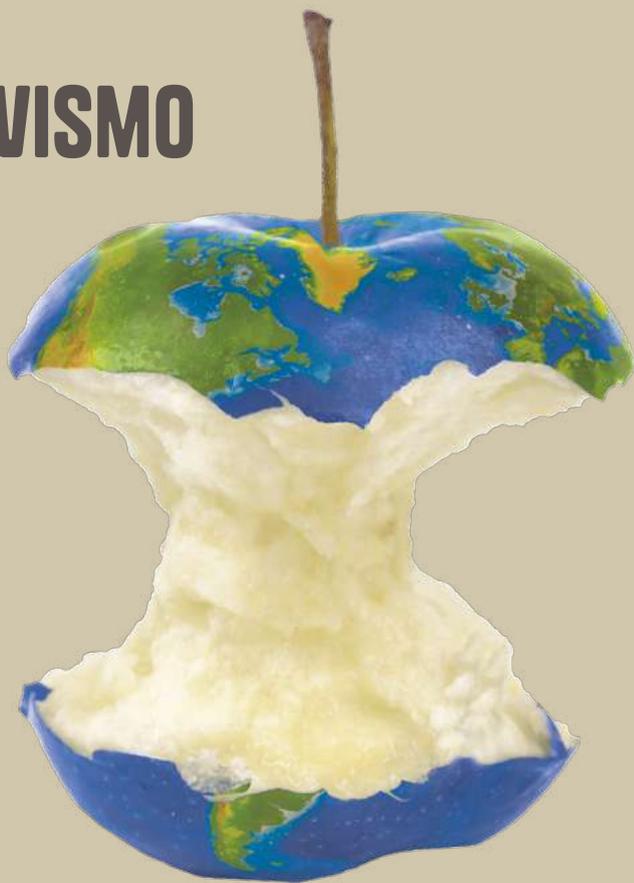


EXTRACTIVISMO AGRARIO EN AMÉRICA LATINA

BEN M. MCKAY
ALBERTO ALONSO-FRADEJAS
ARTURO EZQUERRO-CAÑETE
[COORDS.]



Extractivismo agrario en América Latina

Extractivismo agrario en América Latina / Carla Poth...
[et al.]; Coordinación general de Alberto Alonso-Fradejas ;
Arturo Ezquerro-Cañete ; Ben M. McKay. - 1a ed. - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires : CLACSO ; Canadá : University
of Calgary ; Social Sciences and Humanities Research
Council, 2022.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-813-264-8

1. América Latina. 2. Agricultura. 3. Biotecnología. I. Poth,
Carla. II. Alonso-Fradejas, Alberto, coord. III. Ezquerro-Ca-
ñete, Arturo, coord. IV. McKay, Ben M., coord.

CDD 306.364

Edición: Licia López de Casenave

Diseño de tapa: Dominique Cortondo Arias

Diseño del interior y maquetado: Eleonora Silva

Extractivismo agrario en América Latina

**Ben M. McKay, Alberto Alonso-Fradejas
y Arturo Ezquerro-Cañete**
(coordinadores)



Social Sciences and Humanities
Research Council of Canada

Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada

Canada





CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

CLACSO Secretaría Ejecutiva

Karina Battyány - Directora Ejecutiva

María Fernanda Pampín - Directora de Publicaciones

Equipo Editorial

Lucas Sablich - Coordinador Editorial

Solange Victory y Marcela Alemandi - Gestión Editorial



LIBRERÍA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES

CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE

Los libros de CLACSO pueden descargarse libremente en formato digital o adquirirse en versión impresa desde cualquier lugar del mundo ingresando a www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana

Extractivismo agrario en América Latina (Buenos Aires: CLACSO, agosto de 2022).

ISBN 978-987-813-264-8



CC BY-NC-ND 4.0

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

CLACSO. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875 | clacso@clacsoinst.edu.ar |

www.clacso.org



Este material/producción ha sido financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Asdi. La responsabilidad del contenido recae enteramente sobre el creador. Asdi no comparte necesariamente las opiniones e interpretaciones expresadas.

Índice

| | |
|--|-----|
| Agradecimientos | 9 |
| Introducción | 11 |
| <i>Ben M. McKay, Alberto Alonso-Fradejas y Arturo Ezquerro-Cañete</i> | |
| Capítulo 1. El Modelo Agrario Biotecnológico en Argentina. Luchando en contra del capital en la ciencia..... | 47 |
| <i>Carla Poth</i> | |
| Capítulo 2. Dinámicas extractivas en el sector agrario de Bolivia | 91 |
| <i>Ben M McKay y Gonzalo Colque</i> | |
| Capítulo 3. Extractivismo agrario en el Cerrado brasileño | 125 |
| <i>Sérgio Sauer y Karla R. A. Oliveira</i> | |
| Capítulo 4. Reproducción social, despojo y el funcionamiento generizado del extractivismo agrario en Colombia | 163 |
| <i>Diana Ojeda</i> | |

| | |
|--|-----|
| Capítulo 5. Extractivismo agrario y desarrollo sostenible. La política de expansión de la piña en Costa Rica..... | 189 |
| <i>Andrés León Araya</i> | |
| Capítulo 6. La inclusión de género en la producción de agrocombustibles en la costa del Ecuador. Promesas ilusorias de desarrollo rural en el marco de un nuevo extractivismo agrario..... | 221 |
| <i>Natalia Landívar García</i> | |
| Capítulo 7. La purga agroextractivista en Guatemala. ¿Hacia un futuro renovable pero insufrible? | 259 |
| <i>Alberto Alonso-Fradejas</i> | |
| Capítulo 8. Producción extractiva de agave y tequila en Jalisco, México..... | 305 |
| <i>Darcy Tetreault, Cindy McCulligh y Carlos Lucio</i> | |
| Capítulo 9. Extractivismo Forestal - Uruguay | 343 |
| <i>Markus Kröger y Maria Ehrnström-Fuentes</i> | |
| Sobre los autores y las autoras..... | 385 |

Capítulo 3

Extractivismo agrario en el Cerrado brasileño

Sérgio Sauer y Karla R. A. Oliveira

Introducción

Durante los días 20 a 23 de noviembre de 2019, las cadenas de noticias nacionales anunciaron el despliegue de la “Operación Lejano Oeste”, llevada a cabo por la Policía Federal en varias ciudades del estado de Bahía y en el Distrito Federal. La operación policial destituyó al presidente del Tribunal de Justicia de Bahía y se llevó detenidos a cinco jueces. Una investigación llevada a cabo por el Ministerio Público Federal alegó delitos de corrupción, blanqueo de dinero y organización criminal. Todos ellos estaban relacionados con el “grilagem” —acaparamiento de tierras públicas y de usos comunales a través de un esquema de defraudación de documentos— revelado en el oeste de Bahía que se presume involucra a jueces, abogados y grandes terratenientes (Camargo, 2019).

El esquema se construyó sobre la venta de sentencias judiciales que legalizarían el acaparamiento de tierras públicas y comunales en la región de la frontera agrícola conocida como Matopiba. Acrónimo derivado de los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía, esta región ha sido vista en los últimos años como la “más nueva” frontera agrícola caracterizada por las tendencias globales en la

intersección de la tierra agrícola y las finanzas (Mançano Fernandes, 2019).

Según las investigaciones, las sentencias judiciales habían legalizado unas 360 000 ha, pero el esquema de sentencias para la venta implicaba más de 800 000 ha en disputa (Fernandes, 2019). Este se convirtió en otra historia de apropiación ilegal de tierras (acaparamiento de tierras con fines especulativos) a lo largo de una frontera que había sido transformada para la producción de soja a gran escala, lo que indica cómo ha procedido el extractivismo agrario en Brasil.

A pesar de que el acaparamiento de tierras ha sido históricamente un componente fundamental, el extractivismo agrario no puede reducirse a las apropiaciones ilegales de tierras públicas o comunales y a su perspectiva especulativa. Como parte de la llamada cuestión agraria, es más bien un proceso estructural de “acumulación por desposesión” (Harvey, 2003) que incluye diversas formas de apropiación (legal e ilegal) de recursos naturales, más allá de la tierra, como los bosques, el agua y los minerales (recursos subterráneos) con consecuencias sociales. El extractivismo agrario brasileño se compone de una combinación de inversiones en la producción de monocultivos intensivos a gran escala para la exportación en latifundios muy grandes, antiguos latifundios (Delgado, 2013) y procesos especulativos (financiarización). Cuenta con el apoyo (recursos públicos) y la connivencia (flexibilización de las leyes) del Estado (Martins, 2012), que ha impulsado la expansión de las fronteras agrícolas, transformando el uso de la tierra y profundizando la apropiación de la naturaleza.

En Brasil el extractivismo agrario contemporáneo surgió a partir de la implementación de la revolución verde a mediados del siglo XX. Se ha basado en la concentración de la tierra (grandes explotaciones) (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística [IBGE], 2017), la especulación y el “grilagem” (acaparamiento de tierras), y no se reduce a su dimensión productiva. El extractivismo agrario está estrechamente relacionado con la especulación financiera, especialmente

después de la crisis económica de 2008. Históricamente, ha estado arraigado en los pactos de poder entre las élites agrarias (grandes terratenientes), la agroindustria y el Estado (Delgado, 2013). Incluso, con base en narrativas neoliberales (Mançano Fernandes, 2019), refuerza las posiciones políticas conservadoras, lo que resulta en pobreza y desigualdad (Martins, 2012).

En las últimas décadas, el bioma del Cerrado (sabanas brasileñas) se ha convertido en un motor económico, ganando la atención internacional como la más reciente y mayor frontera agrícola (*The Economist*, 2010). La región representa casi una cuarta parte del territorio nacional y más de la mitad de la producción de soja brasileña (IBGE, 2017). A pesar de su suelo relativamente ácido y su infraestructura subdesarrollada, el Cerrado en general y el Matopiba en particular se han convertido en un destino importante para las empresas de agronegocios a gran escala (Favareto, 2019), profundizando los procesos de extractivismo agrario al abrir nuevas áreas dedicadas a los cultivos destinados a la exportación (Flexor y Leite, 2017). Además, como lugares de “la degradación del otro” (Martins, 2012) y donde se despliegan rápidamente formas de acumulación por desposesión. La frontera de Matopiba se constituye en uno de los lugares donde el extractivismo agrario es más evidente en Brasil.

Como es común con las tierras destinadas a la expansión capitalista, la Matopiba está marcada por altos niveles de inversiones nacionales y extranjeras, combinados con pobreza, desigualdad y bajos niveles de protección ambiental (Favareto, 2019). Frente al avance de la frontera agrícola, las comunidades rurales resisten y defienden sus territorios y bienes comunes, especialmente el derecho de acceso y control del agua de calidad. Se trata de una relación conflictiva entre el desarrollo capitalista extractivo y la resistencia popular (Veltmeyer y Zayago Lau, 2019), en la que los principales actores son los indígenas y las comunidades tradicionales de la región de Matopiba (Mançano Fernandes, 2019).

La tendencia a la financiarización de la tierra ha afectado compromisos nacionales de larga data con la reforma agraria y la

demarcación de territorios, que se estancaron desde el gobierno de Rousseff (2012-2016) y el breve gobierno de Temer (2016-2018) y fueron completamente abandonados por el gobierno de Bolsonaro en 2019 (Sauer et al., 2019a). Las crisis políticas y económicas que se han apoderado del país en la última década han sido presentadas como evidencia de la necesidad de flexibilizar las restricciones a la inversión extranjera. Así, estos años de crisis desde 2016 han dado impulso a los procesos de financiarización y desposesión (Harvey, 2003) del campo brasileño (Flexor y Leite, 2017), específicamente a lo largo de la frontera de Matopiba (Favareto, 2019).

El discurso oficial ha retratado el agronegocio como el sector más estable en una economía errática que, por lo demás, ha frustrado la inversión internacional (Sauer, 2018; Leite et al., 2019). La noción de “agronegocio” ha tenido un significado diferente en Brasil que en Estados Unidos, por ejemplo, donde se forjó en la década de 1960 (Gryszpan, 2012). El concepto comenzó a utilizarse a mediados de la década de 1990 en Brasil, en un intento de superar la historia de la modernización agrícola asociada a la concentración y la especulación de la tierra, los conflictos agrarios y la baja productividad. El agronegocio se vinculó entonces al discurso de la modernización, la eficiencia técnica —producción basada en inversiones privadas en tecnología, asociada al concepto reduccionista de “industrialización de la agricultura”— y un sector rentable (Gryszpan, 2012). Según Delgado (2013, p. 62), el agronegocio brasileño es un “pacto virtual de economía política”, con crucial apoyo estatal y público, que perpetúa el poder de los grandes terratenientes.

A lo largo del gobierno de Temer, y en los años anteriores, los elogios al agronegocio orientado a la exportación fueron un pilar de la retórica de recuperación económica que caracteriza al extractivismo agrario en Brasil. Los procesos de concentración de la tierra, la deforestación y la expansión del agronegocio estuvieron presentes a lo largo de los gobiernos de Lula (2003-2010) y Rousseff (2011-2016); generando la expulsión de las poblaciones rurales del campo y el aumento de los conflictos por la tierra. Tal como se preveía estas

tendencias se aceleraron durante la presidencia de Temer (véase Sauer, 2018). Bajo el gobierno de Bolsonaro (2019-2022), el panorama sigue siendo sombrío, con más tensiones y conflictos en el campo, ya que el gobierno ha ofrecido abiertamente su apoyo político a los grandes terratenientes y ha actuado para legalizar el acaparamiento de tierras, flexibilizar las reglas de control ambiental y fomentar las inversiones extranjeras (Sauer et al., 2019a), incluso liberar la minería en tierras indígenas.

En este capítulo se analizará cómo se ha promovido el extractivismo agrario a lo largo de las fronteras agrícolas y sus implicaciones para los territorios tradicionales y las áreas de conservación, concretamente en la región de Matopiba del Cerrado brasileño. Se analizará la ampliación de la frontera agrícola como parte del Cerrado como “zona sacrificada” para la expansión de la producción de soja y la ganadería. Por último, se discutirá el caso del Parque Nacional de la Fuente del Río Parnaíba como caso representativo para explicar los conflictos socio-ambientales causados por la expansión de la frontera agrícola, y la resistencia social relacionada con la apropiación de la tierra y el agua en el Matopiba.

Extractivismo agrario: la apropiación de la tierra y la naturaleza en la frontera agrícola brasileña

En la década de los 40 y posteriormente con un impulso renovado tras el régimen militar dictatorial de 1964, en Brasil se consolidó una política de expansión económica orientada a la producción agrícola y ganadera. Según el discurso oficial, esta política tenía dos objetivos fundamentales: (i) ocupar espacios vacíos en todo el territorio nacional (especialmente aquellas regiones con tierras baratas) y (ii) minimizar los conflictos de tenencia de la tierra en las regiones sur, sureste y noreste del país (Delgado, 2013). La llamada Marcha hacia el Oeste fomentó la ocupación de la región central de Brasil y orientó diferentes flujos migratorios, centrándose en la ocupación de tierras

públicas y comunales y en la exploración de áreas del bioma del Cerrado y de la Amazonia (Martins, 1996).

La implementación de las tecnologías de la revolución verde en el centro-sur del país a partir de la década de 1960 —que formaba parte del plan de industrialización o modernización de la agricultura de la dictadura militar— no dio lugar a cambios significativos en la lógica de expansión de las fronteras agrícolas contempladas en la Marcha hacia el Oeste (Sauer y Leite, 2012). Los cambios en los factores de producción —la adopción de la mecanización intensiva, los fertilizantes químicos y las semillas seleccionadas— modernizaron las grandes propiedades (latifundios) (Martins, 1996), pero no modificaron la concentración de la tierra ni disminuyeron la expansión de la frontera en sí. Por el contrario, la modernización de las grandes propiedades con crédito subsidiado y apoyo estatal estuvo vinculada a incentivos (especialmente exenciones tributarias para la industria y las empresas financieras) destinados a inversiones privadas y proyectos de colonización (Hecht, 2005), que sirvieron de base para la profundización del extractivismo agrario y la concentración de la tierra (IBGE, 2017).

Según Martins (1996), en la década de 1970 las sociedades latinoamericanas —incluido Brasil, a pesar de sus diferencias con la América española— estaban moldeadas por la lógica de las fronteras agrícolas. El crecimiento económico y las relaciones sociales estuvieron marcados por la movilización y el desplazamiento geográficos, ya que se alentó a los países a utilizar las tierras “no ocupadas” o “insuficientemente ocupadas” (Hecht, 2005), demostrando una total indiferencia y desprecio por el uso actual de la tierra por parte de las poblaciones locales, los pueblos indígenas, los campesinos, las comunidades tradicionales y otros. Además de estar situadas geográficamente en los márgenes, las fronteras agrícolas son cruciales para mantener bajos los precios de las tierras disponibles para su apropiación, o las inversiones privadas en tierras “insuficientemente ocupadas” (es decir, tierras baratas o “libres”). Estas fueron promovidas con incentivos públicos que subvencionan las inversiones en tecnologías

modernas (maquinaria, productos químicos, infraestructura de almacenamiento) que impulsan el crecimiento agrícola y reducen las “brechas de rendimiento” presentes en las fincas no capitalizadas y en la agricultura campesina (Banco Mundial, 2010).

Tales procesos revelan la base histórica del extractivismo agrario en Brasil. Según muchos autores (Svampa, 2019; Gudynas, 2018; Acosta, 2013), el extractivismo y sus conceptos asociados —como neoextractivismo y posextractivismo—, son producto de una trayectoria histórica de desarrollo presente en toda América Latina desde su colonización. La estrategia detrás de este extractivismo ha implicado una dependencia económica de la explotación de los recursos naturales, asociada a una violenta expansión de las fronteras y a la exportación de sus recursos naturales, además del despojo y el genocidio vinculados a la “invención de Europa y la expansión del capital” (Svampa, 2019, p. 16).

Los ciclos económicos impuestos por esta lógica capitalista trajeron grandes contrastes a una región que se encontró dividida entre el desarrollo de sus fuerzas productivas basado en la rentabilidad de un sistema exportador construido sobre sus recursos naturales, por un lado, y la pobreza extrema, la desigualdad y las resistencias sociales (Veltmeyer y Zayago Lau, 2019) por el otro. Así comenzó la apropiación a gran escala, caracterizada por la exportación de materias primas y un gran nivel de dependencia de la economía global (Svampa, 2019). En consecuencia, el extractivismo no define únicamente a la minería, sino que está presente en cualquier tipo de explotación y apropiación de la naturaleza, incluida la agricultura (Acosta, 2013).

Sin embargo, desde principios del siglo XXI, con el aumento global de los precios de las materias primas —el llamado “boom de las *commodities*”— la región ha sido testigo del surgimiento de nuevas posibilidades en las que el capital extractivo está consolidando la expansión y la apropiación de los recursos naturales, especialmente en lo que respecta a la tierra. Esta nueva fase del extractivismo se denomina neoextractivismo (Svampa, 2019; Acosta, 2013), especialmente por la distribución de ingresos y ganancias del estado (recaudación

de impuestos a la exportación) con políticas sociales. El modelo se ha visto favorecido por la planificación y la gestión, el uso intensivo de tecnologías y el compromiso de tierras “no utilizadas” y otras ya abiertas a la producción agrícola y ganadera (Hecht, 2005). Estos elementos son apoyados además por los incentivos gubernamentales destinados a ampliar las fronteras y aumentar la competitividad brasileña en el mercado internacional de productos agrícolas (Sauer, 2018).

En esta nueva fase del extractivismo, surgen algunas “rupturas y continuidades” (Svampa, 2019). Estas continuidades se deben a la memoria colonial del extractivismo en los países latinoamericanos y a un imaginario de abundancia infinita de recursos naturales en la región, que impulsa la expansión de las fronteras (Martins, 2012). Las rupturas son consecuencia de la profundización de la degradación de la tierra, lo que resulta en nuevas formas de resistencias y disputas políticas y sociales que involucran la tierra, el territorio y los recursos naturales (Veltmeyer y Zayago Lau, 2019).

Las narrativas hegemónicas que apoyan el extractivismo —y el extractivismo agrario— se basan en una serie de argumentos y actos políticos (Almeida, 2011). Buscan construir y sostener el apoyo público (subsidios estatales y respaldo legal) que legitima los procesos de acumulación asociados a las actividades extractivas (Gudynas, 2019). Esto se extiende e incluye el apoyo al agronegocio (principalmente a los grandes monocultivos y a la ganadería), y a la apropiación de tierras y recursos naturales, incluyendo las apropiaciones ilegales,¹ basándose en la narrativa de que aumentar la producción para la exportación es la única solución (Svampa, 2019).

¹ Las Medidas Provisionales N.º 759, emitidas en diciembre de 2016 por Temer, y la N.º 910, publicada en diciembre de 2019 por Bolsonaro, se inscriben en la lógica histórica de la apropiación de tierras basada en el apoyo del Estado. Estas leyes fueron emitidas para legalizar (emitiendo títulos de propiedad) tenencias ilegales de áreas públicas de hasta 2 500 ha, con pagos muy bajos, ya que los valores más altos serán del 50 % del valor de mercado de la tierra (Leite et al., 2019).

Como sostiene Almeida (2011, p. 102), estos aparatos de justificación de los discursos políticos, el apoyo de los medios de comunicación, las investigaciones académicas y los mecanismos judiciales podrían entenderse como agroestrategias que actúan para promover la expansión de las fronteras agrícolas como “la única solución a la crisis del sistema alimentario y a todos los problemas relacionados con las cadenas de suministro de alimentos”. Constituyen una parte importante de una agenda política más amplia —que abarca a las agencias multilaterales y a los medios de comunicación— y se basan en una narrativa íntimamente ligada a las necesidades de abastecimiento de alimentos. Incluyen discursos que apoyan la relajación de los mecanismos legales y el apoyo financiero del Estado a la agroindustria. Para Almeida (2011), estas agroestrategias están formadas por complejas coaliciones con intereses compartidos que pueden unificar a gobiernos conservadores y populistas, corporaciones financieras e intereses mediáticos. Esta alineación puede llevar a lecturas amplias y difusas de estos temas, resaltando la importancia de las tecnologías y minimizando a los efectos de la concentración de la tierra, exaltando las posibilidades del mercado (exportación) de materias primas y minimizando los efectos del cambio climático.

Las agroestrategias, como una combinación de narrativas y acciones políticas, también abarcan un conjunto de iniciativas destinadas a eliminar los obstáculos judiciales y formales a la producción, al tiempo que facilitan grandes extensiones de tierra a los intereses industriales (Almeida, 2011). El pacto político que engloba esta estrategia se hizo claro y concreto en los cambios propuestos en el Código Forestal en 2012, especialmente la propuesta de reducir la Reserva Legal (área forestal protegida) en la Amazonia, aumentando la disponibilidad de tierra para la agricultura y los pastos (Sauer y França, 2012).

Marcado por narrativas económicas ultraliberales y un exacerbado conservadurismo político y moral, el gobierno de Bolsonaro (2019-2022) ha profundizado aún más este pacto político al tiempo que ofrece su apoyo explícito a proyectos caracterizados por el

extractivismo agrario. Para ello, dictó la Medida Provisional 910, que regularizó las ocupaciones ilegales de tierras públicas y abrió la posibilidad de que se titularan ocupaciones similares de hasta 2 500 ha en cualquier lugar de Brasil (Sauer et al., 2019a). Ha fomentado públicamente la expansión de la frontera agrícola y el aumento de la producción de soja y ganado en tierras indígenas y tradicionales (comunales), así como en áreas protegidas. Su ministro de Agricultura — antiguo presidente del Frente Agrario Parlamentario, más conocido como Caucus Rural— ha apoyado incondicionalmente los proyectos de ley del Congreso destinados a desregular la inversión extranjera en la tierra (Castro et al., 2017).

Analizando los procesos recientes de acumulación, Delgado (2013) definió las dinámicas políticas y económicas del extractivismo agrario utilizando el concepto de “economía del agronegocio”. Este se basa en un pacto de poder con características similares a las de una agroestrategia (Almeida, 2011) y el extractivismo (Acosta, 2013). Según Delgado (2013, p. 63), la economía del agronegocio se extrapola sobre una estrategia económica pura para “construir ideológicamente una hegemonía desde arriba, aglutinando latifundios, cadenas agroindustriales estrechamente vinculadas al sector exterior y las burocracias del Estado”. Está permitiendo “la acumulación de capital bajo el ámbito de estos sectores fundidos por el dinero público” (Delgado, 2013, p. 62), a partir de un discurso de “gobernanza ambiental” como “condición de posibilidad del neoextractivismo” (Baletti, 2014, p. 7) o extractivismo agrario (McKay, 2017; Veltmeyer y Zayago Lau, 2019).

El extractivismo agrario en Brasil, que combina inversiones productivas e improductivas, tiene sus raíces en “la captura y sobreexplotación de las ventajas comparativas naturales” o en la renta del suelo (Delgado, 2013, p. 64), apropiándose de la tierra y la naturaleza. Su lógica extractiva se basa en la producción, pero también en la especulación, dando lugar a la “acumulación por desposesión” (Harvey, 2003). El extractivismo agrario incluye las inversiones de empresas agrícolas nacionales y extranjeras para la exportación, la

desnacionalización del sector agroindustrial y el acaparamiento de tierras (Borras et al., 2012), y la apropiación de tierras públicas y comunales, lo que da lugar a conflictos por la tierra y a la desigualdad social (Sauer y Castro, 2020).

Después de 1998, el extractivismo agrario representado por la economía del agronegocio se convirtió en un rasgo central de la lógica económica de Brasil. Especialmente en términos de la balanza comercial (exportación), representó un pacto estratégico entre “el gran capital agroindustrial, el sistema de crédito público a la agricultura y la agroindustria, la propiedad de la tierra y el Estado” (Carvalho, 2013, p. 34). La expansión del capital extractivo se vio acelerada por el aumento del precio de las materias primas en los mercados mundiales y por la disponibilidad de tierras “baratas”, lo que dio lugar al “predominio del capital invertido en la tierra y en los recursos naturales, como los minerales y los metales, los hidrocarburos y los agrocombustibles”. Este proceso de acumulación se asoció a un “ciclo político progresivo” (Veltmeyer y Zayago Lau, 2019, p. 49), creando políticas socio-asistenciales que darían un carácter novedoso al extractivismo agrario (Sauer, 2019).

Según Delgado (2013), dicha “economía del agronegocio”, basada en un pacto de poder político, emplea un conjunto de dispositivos ideológicos, como (i) una activa bancada del agronegocio (el Caucus Rural) en el Congreso Nacional para apoyar los acuerdos legales; (ii) una activa asociación de la clase del agronegocio para representar los intereses y promover la acumulación; (iii) una burocracia estatal destinada a ampliar el crédito público y el apoyo gubernamental; (iv) la pasividad de las instituciones públicas reguladoras, incluyendo la flexibilización de las leyes y la regularización del acaparamiento de tierras; (v) una fuerte cooptación de los círculos académicos; y (vi) la connivencia y el apoyo de los medios de comunicación nacionales.²

² El apoyo más explícito de los medios de comunicación proviene de una campaña publicitaria en el canal Rede Globo, titulada “Agro es *tech* [tecnología]. Agro es pop. Agro es todo”, que se emite en horas de mucho tráfico y con una considerable

El extractivismo agrario ha dado lugar a un conjunto de conflictos socio-ambientales, en particular conflictos por la tierra, el territorio, el agua y otros recursos naturales (Oliveira y Sauer 2020). A medida que la frontera agrícola continúa expandiéndose, invade la tierra y el territorio de las comunidades ribereñas y de otras poblaciones tradicionales (por ejemplo, las comunidades cimarronas o quilombolas), los pueblos indígenas y los productores rurales familiares que se asentaron en la Amazonia y el Cerrado hace muchas décadas (Martins, 1996). En la siguiente sección se analizan los procesos de extractivismo agrario en una región del bioma del Cerrado: Matopiba.

Extractivismo agrario, inversiones y desigualdad en el Matopiba

La agroindustria a gran escala se ha expandido a una velocidad vertiginosa en el Cerrado, transformando a Brasil en el segundo mayor productor de soja del mundo. En un contexto de creciente inversión extranjera y simultánea depresión económica, el llamado “milagro del Cerrado” (*The Economist* 2010) fue alabado y exportado como un caso exitoso de modernización agrícola impulsado por inversiones nacionales, extranjeras y transnacionales en tierra, tecnología e infraestructura (Delgado, 2013), aunque fuertemente apoyado por recursos públicos (Sauer, 2019, 2018).

La transformación del Cerrado en uno de los paisajes agrícolas más productivos de Sudamérica se remonta a la década de 1960, cuando se implementó en Brasil un paquete técnico que acompañaba a la revolución verde (Martins, 2012). Aunque la financiarización del campo brasileño es un fenómeno bastante reciente,³ es una con-

financiación de un banco que, de hecho, no financia el agronegocio (para más detalles, véase Bruno, 2012).

³ El proceso de financiarización —acumulación donde la ganancia ya no se deriva del capital productivo sino a través de canales financieros— se caracteriza por el

secuencia de las narrativas institucionales de larga data que claman por la industrialización, la modernización y la internacionalización del sector agrícola (Delgado, 2013).

La rápida conversión del bioma del Cerrado en un bastión del agronegocio encaja como uno de los capítulos más recientes de un amplio conjunto de trabajos académicos sobre la concentración de la tierra, el acaparamiento de tierras, el extractivismo agrario y el despojo del campo brasileño. Alrededor del 50 % del bioma ha sido deforestado por la expansión de las fronteras agrícolas promovida por el Estado en las últimas tres o cuatro décadas (Favareto, 2019).

Sin embargo, la transformación del Cerrado ha sido controversial (*The Economist*, 2010), debido a que la expansión de las empresas agroindustriales ha acelerado la degradación ambiental y el desplazamiento de las comunidades locales y tradicionales (Castro et al., 2017). Las indulgentes protecciones ambientales en el Cerrado han tenido un claro impacto en el paisaje: después de la Mata Atlántica, el Cerrado es el bioma más grande y más alterado de Brasil. Con apenas un 3,65 % del Cerrado —unos 73 000 kilómetros cuadrados—, el Matopiba representa el 62 % de su deforestación. Entre 2013 y 2015, la región perdió 36 900 kilómetros cuadrados de bosque (Favareto, 2019).

Después de 1998, y en particular en la primera década del 2000, los agricultores mecanizados a gran escala aumentaron su presencia en la región del Cerrado y, con la expansión de la frontera agrícola, aumentaron la deforestación y los conflictos por la tierra. En los últimos años, esta transformación ha tenido lugar tanto en los biomas de la selva tropical (Amazonía) como en el Cerrado —especialmente

papel creciente de los motivos (especulación, renta), mercados (producción, ganancias financieras) y las instituciones financieras (bancos, bolsas de valores, fondos de pensiones), que operan (especulan) y dominan a las economías nacionales e internacionales (Epstein, 2005). La financiarización de la agricultura se debe a la creciente separación entre producción (y productividad) y ganancias (ingresos y renta), a partir de inversiones en papeles y acciones en bolsas de valores (especulación en mercados de futuros) y de la tierra se es la combinación de inversiones productivas (compra, arrendamiento para producir *commodities*) y especulativas (compra y otras formas de control como reserva de valor).

en el Matopiba (Sauer, 2018; Castro y Sauer, 2020)— con graves impactos ambientales (Baletti, 2014). En 2015, la producción de granos (principalmente soja) en el Cerrado superó a la de la región sur por primera vez en la historia del país (Favareto, 2019).

Aunque la Matopiba representa aproximadamente un tercio del Cerrado total —730 000 de sus dos millones de kilómetros cuadrados—, se ha convertido en piedra angular de la retórica de expansión del agronegocio hacia el centro-norte de Brasil (Pereira et al., 2017). La producción de soja en esos cuatro estados ha aumentado de unas 769 000 toneladas (t) en 1993 a más de 14,5 millones de toneladas en 2017-2018. La producción de soja en el Matopiba se ha duplicado en los últimos siete años y se ha multiplicado casi por veinte en los últimos quince años, representando el 11 % de la producción nacional en 2017. Su superficie cultivada abarca 4,3 millones de ha, es decir, el 12,3 % de la superficie total cultivada con soja en 2017, pero su cultivo se ha concentrado en pocos municipios (Favareto, 2019).

Después de 2010, la Matopiba se convirtió en un objetivo natural para las nuevas inversiones, dada la falta de protecciones ambientales y de aplicación de la ley en el Cerrado, así como los discursos de tierras “improductivas” y “disponibles” en la región (lo que resultó en varios casos de acaparamiento de tierras públicas y comunales). Además, la Matopiba tiene una ubicación estratégica en la proximidad del puerto norteño de São Luis (Estado de Maranhão) y de otros grandes puertos de salida de la soja. Este proceso de inversiones se aceleró aún más por la presión estatal para desarrollar la región como una potencia agroindustrial mundial en el contexto del auge internacional de materias primas (Flexor y Leite, 2017).

La actual expansión de la soja, el maíz y el algodón en el Matopiba cobró mayor impulso en 2015, cuando el Estado brasileño presentó el plan oficial de desarrollo del Matopiba para la región, basado principalmente en incentivos gubernamentales que apoyaban la expansión agrícola (Sauer et al., 2019a). En su presentación, el gobierno anunció que se esperaba cultivar y poner en producción hasta 10,9 millones de hectáreas en la región para 2023. Más allá de una nueva

frontera agrícola, el Matopiba se estaba convirtiendo en un territorio de expansión capitalista y de extranjerización de la tierra (Pereira et al., 2017).

Después de asumir el poder tras la destitución de Dilma Rousseff en 2016, Michel Temer se desvió bruscamente de la retórica agraria del Partido de los Trabajadores [PT]. Las políticas agrarias se vieron profundamente afectadas, incluyendo la extinción del Ministerio de Desarrollo Agrario [MDA], responsable de los programas de reforma agraria. Sin embargo, mantuvo y aumentó el apoyo público al agonegocio, especialmente el crédito y el apoyo técnico de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria [Embrapa], ayudando a quienes estaban invirtiendo en la región de Matopiba (Sauer et al., 2019a). Entre las prioridades anunciadas por la administración estaba la flexibilización de las restricciones de 2010 que limitaban la propiedad extranjera de la tierra y de las políticas públicas ambientales, especialmente la disminución de los mecanismos de control (Leite et al., 2019). A pesar de tener claras intenciones de eliminar las barreras a la propiedad extranjera de la tierra, la resistencia interna —sobre todo de Blairo Maggi, multimillonario productor de soja, exgobernador de Mato Grosso, dueño del Grupo Amaggi y en ese momento ministro de Agricultura— hizo que estos esfuerzos tuvieran poca tracción (Sauer y Mészáros, 2017).

Sin embargo, al trabajar más estrechamente con el Caucus Rural, la influencia política ejercida por el sector del agonegocio se hizo más visible, dejando más claro el apoyo de Temer a los proyectos agrarios que son extractivos en forma y carácter. En 2017, con el apoyo del Congreso, Temer logró aprobar una legislación que facilitó la privatización de parcelas públicas ilegalmente adquiridas en regiones de frontera, incluyendo las tierras concedidas en el marco de la reforma agraria (Leite et al., 2019). La facilidad de aplicación de esta legislación se vio reforzada en gran medida por la modificación de la Medida Provisional 910 en 2019 por parte de Bolsonaro, que permitió la titulación de terrenos públicos en todo Brasil. Esta legislación también ha beneficiado a quienes se apropian ilegalmente de grandes

extensiones de tierra (hasta 2 500 ha) en las regiones de la Amazonia, el Cerrado y Matopiba (Sauer et al., 2019a), con pagos bajos o nulos.

Además de las grandes inversiones en tierras —incluso por parte de extranjeros— y de su papel en el mercado mundial de la soja, la región de Matopiba se caracteriza por sus altos niveles de pobreza y desigualdad social. Según Favareto (2019), hay “cuatro Matopibas”⁴ diferentes y, tras la expansión agrícola, hay más pobreza, injusticia y desigualdad que riqueza y bienestar en la región. En un total de 337 municipios dentro de Matopiba, solo 45 podrían clasificarse como “ricos” o con un Producto Interior Bruto [PIB] superior a la media nacional (Favareto, 2019). El hecho de que la producción se concentre en pocos municipios impide la distribución de los beneficios en el resto del territorio. Los monocultivos también se basan en la producción mecanizada y en el ahorro de mano de obra, generando pocos puestos de trabajo. Es una síntesis contradictoria de acciones “modernizantes” del Estado patrimonial y empresarial (con inversiones públicas para promover el crecimiento privado capitalista), inversiones y emprendimientos privados y de empresas multinacionales (Favareto, 2019), combinado con antiguas prácticas latifundistas, con base en la concentración de la tierra (Martins, 1996), demostrando el carácter extractivo en el desarrollo agrario en Brasil.

Las oportunidades del agronegocio presentes en la región, tanto reales como especulativas, han tenido impactos perjudiciales en los sectores más vulnerables del campo brasileño: comunidades tradicionales y quilombolas (cimarrones), pequeños agricultores y

⁴ Según Favareto (2019), el Censo Agropecuario del IBGE de 2006 constató la existencia de 250 238 establecimientos agrícolas en Matopiba (5,7 % del total nacional), el 15 % de ellos con menos de 100 hectáreas y el 85 % con más de 100 hectáreas. Los ingresos monetarios brutos posibilitan clasificar a estos establecimientos en: (1) el 80 % de los establecimientos son “muy pobres”, ya que generan solo el 5,22 % del ingreso monetario bruto; (2) el 14 % son establecimientos “pobres”, ya que generan el 8,35 % de los ingresos; (3) un segmento intermedio o “medio” representa solo el 5,79 %, pero genera el 26,74 % de la renta, y (4) los “ricos” que representan solo el 0,42 % o poco más de mil establecimientos y concentran el 59,78 % del ingreso monetario bruto de Matopiba.

pueblos indígenas (Oliveira, 2018). Estos grupos han sufrido violencia directa, además de amenazas, desalojos forzados, contaminación de fuentes de agua y expropiación de tierras comunes. En muchos casos, la pérdida de tierras es el resultado de la falsificación de documentos y del acaparamiento de tierras (Favareto, 2019), como es el caso del acaparamiento de tierras en el Estado de Bahía ya mencionado (Camargo, 2019; Mançano Fernandes, 2019).

La narrativa histórica que ha descrito el Cerrado y la Matopiba como “vacíos” o sin actividad humana se ha utilizado para legitimar la exclusión de estas comunidades de los proyectos de desarrollo nacional y el avance de las políticas destinadas a aumentar la legibilidad y la legalidad especialmente de tenencias ilegales de la tierra (Martins, 2012; Hecht, 2005). Las políticas estatales que dan prioridad a la conservación del bioma amazónico, mientras que reducen la protección ambiental en el Cerrado, han hecho de esta región y, en particular, de la Matopiba un territorio para el desarrollo del agonegocio a gran escala en las últimas décadas. A diferencia de los estados amazónicos, donde los agricultores privados están obligados a mantener el 80 % de sus propiedades como bosque natural, en los estados que comprenden el Matopiba, apenas un 20 % del bioma del Cerrado debe ser conservado en propiedad privada (Oliveira y Hecht, 2016; Sauer y França, 2012).

En este contexto, los proyectos políticos —especialmente la flexibilización de normas y leyes, elemento fundacional de la extranjerización, financiarización y carácter extractivo del uso de la tierra y de las condiciones laborales— han dado lugar a la desnacionalización del territorio nacional, reduciendo la capacidad de regulación y debilitando la soberanía (Sassen, 2014). Así, a diferencia del período colonial —o incluso de procesos de expropiación más recientes— se han producido nuevas y más flexibles medidas gubernamentales destinadas a legalizar la expropiación y el acaparamiento de tierras (Sauer et al., 2019).

Históricamente, los regímenes de la tierra —incluyendo las leyes, las diversas formas de apropiación y uso de la tierra, los derechos

sobre esta, etc.— se basaban en una lógica nacional que reflejaba la importancia de una nación y su marco legal (Sauer y Castro, 2020). Este proceso aquí descrito, por el contrario, representa una novedad en los procesos del capitalismo tal y como funciona actualmente (Castro et al., 2017). En el caso del Cerrado brasileño, y del Matopiba más concretamente, hay claros indicios de procesos capitalistas de internacionalización o desnacionalización de la tierra y los recursos naturales impulsados por el Estado (Sassen, 2014), lo que evidencia aún más las tendencias del extractivismo agrario.

Sin embargo, la apropiación de los recursos naturales que se produce en el Matopiba se ha enfrentado a procesos de resistencia originados en las comunidades tradicionales que viven en la región desde hace generaciones. La revuelta del municipio de Correntina —un lugar de alta concentración de tierras, agronegocio y desigualdad—⁵ es uno de esos ejemplos, que demuestra la resistencia de las comunidades tradicionales contra el extractivismo agrario en el Cerrado (Mançano Fernandes 2019; Pereira et al., 2017). El 2 de noviembre de 2017, un grupo de aproximadamente 1 000 personas llevó a cabo una acción directa sobre una empresa agroindustrial, Fazenda Igarashi, que posee unas 2 500 hectáreas en Correntina, un municipio del Estado de Bahía, situado en la región de Matopiba. Esta explotación solía bombear agua para el riego desde el río Arrojado, que estaba agotando las reservas de agua de varias comunidades rurales que ya no tenían suficiente agua para el consumo humano y animal. Cansados de esperar una solución por parte de los organismos

⁵ Según el Censo Agropecuario del IBGE, en 2016, el municipio tenía uno de los mayores Productos Internos Brutos [PIB] y el mayor PIB per cápita entre los municipios de la región de Matopiba. La población rural representaba casi el 60 % de la población total, pero la Correntina se ubica dentro de los municipios con más altas concentraciones de de la tierra, ya que los latifundios (tamaño superior a 1 000 ha) ocupaban más del 75 % de la superficie total. El índice de Gini es muy alto, con 0,927, en 2006 (muy cerca del nivel de máxima concentración de la tierra), y la pobreza alcanza al 45 % de la población rural y al 32 % de la población general. El Índice de Desarrollo Humano municipal fue de 0,603, por debajo de la media nacional, siendo un ejemplo del contraste entre el crecimiento económico y la desigualdad social (Sauer et al., 2019b).

gubernamentales responsables, la población saqueó y destruyó la estructura de riego de la granja para subrayar lo perjudicial que había sido el modelo de producción para el medio ambiente y para la población (Mançano Fernandes, 2019; Pereira et al., 2017).

Este acto fue —y sigue siendo— duramente penalizado por distintas representaciones políticas, pero consiguió demostrar que el consumo de agua de la finca era suficiente para abastecer a toda la población correntina. También ha recibido el apoyo de organizaciones de base, como la Comisión Pastoral de la Tierra [CPT] (una organización eclesiástica católica), parlamentarios que apoyan causas populares y movimientos sociales agrarios. Como parte del mecanismo de apoyo público, se convocó una manifestación callejera en la ciudad, que reunió a unas 20 000 personas solo una semana después (Pereira et al., 2017). Esta revuelta y manifestación denunció la lógica social y ambiental depredadora del modelo productivo que está detrás del extractivismo agrario brasileño.

Extractivismo agrario y conflictos socioambientales por la tierra, el agua y el territorio en el Matopiba

Además de alimentar la expansión de su frontera agrícola, desde la década de 1960, Brasil también ha reforzado su legislación medioambiental. Entre 1974 y 1984 —conocida como la “década de la destrucción” debido a la expansión de los cultivos de soja y de las explotaciones ganaderas— el país logró establecer una serie de importantes áreas ambientales protegidas, especialmente en la Amazonia (Ramos, 2014). Mientras estas áreas eran cada vez más vigiladas, el Cerrado se ofrecía como “zona de sacrificio” (Oliveira y Hecht, 2016) para la expansión de la frontera agrícola. Esto se debió en gran medida a su gran extensión y a las condiciones favorables (pendiente del suelo) para las tecnologías modernas utilizadas en los monocultivos. La mayoría de las áreas protegidas en el Cerrado se establecieron solo en la década de 1990 (Eloy et al., 2016), ya que esta región había

sido durante mucho tiempo un territorio de inversión, adquisición de tierras y acaparamiento de tierras, un escenario en el que las características del extractivismo agrario podían expresarse.

El extractivismo agrario tiene importantes implicaciones sociales y ecológicas, ya que requiere un mayor consumo de recursos naturales (principalmente tierra y agua) que provoca la degradación de los ecosistemas y es un importante emisor de gases de efecto invernadero, contribuyendo al cambio climático. Este modelo agroalimentario, que incluye el desarrollo de la agricultura química y de los combustibles que emiten carbono, libera el carbono del suelo a la atmósfera, lo que genera negativos impactos ambientales (McMichael, 2018). Esto es una consecuencia del paradigma de desarrollo brasileño y del extractivismo agrario, entendido en sentido amplio, que se basa principalmente en la renta del suelo (Carvalho, 2013) y el acaparamiento de tierras (Sauer y Borrás, 2016; Borrás et al., 2012).

El acaparamiento de tierras no es un fenómeno nuevo en Brasil. Forma parte de un patrón histórico de concentración de la tierra, que persiste incluso en el siglo XXI. Las inversiones extranjeras son nuevos mecanismos y medios para mantener esta concentración de la tierra. Además, la creciente demanda de tierras intensifica los conflictos territoriales de la misma manera que refuerza el desequilibrio histórico entre la demanda y la oferta social (Sauer y Leite, 2012).

El acaparamiento de tierras también se ha producido principalmente en la frontera agrícola, donde el agua es un recurso disponible. Dado que el agua es un recurso —si no el más importante— para la agricultura,⁶ hay muchos conflictos relacionados con el acceso y la distribución. El concepto de “acaparamiento de agua” se refiere a todas las situaciones en las que hay un actor poderoso que reasigna o toma el control de los recursos hídricos para su propio beneficio, a

⁶ Según la Agencia Nacional del Agua y Saneamiento [ANA] (2018), el 72 % del consumo de agua en Brasil se utiliza para el riego, el 11 % para el pastoreo de ganado, el 9 % para las ciudades, el 7 % para la producción industrial y el 1 % para los asentamientos rurales, lo que revela la importancia del agua, especialmente para la expansión de la producción intensiva de soja en el Cerrado.

pesar del derecho de los usuarios locales y del uso del agua del ecosistema. En general, esas situaciones incluyen la captura del poder de decisión en torno al agua, lo que significa poder de decisión sobre cómo y para qué fines se puede utilizar el agua (Franco et al., 2013; Veldwisch et al., 2018).

Como ocurre con otros recursos naturales, el acaparamiento de agua no puede separarse del fenómeno del acaparamiento de tierras. Veldwisch et al. (2018, p. 62) afirmaron que

aprovechando el debate sobre el acaparamiento de tierras, entendemos el acaparamiento de agua como la captura del control no solo del agua en sí, sino también del poder de decidir cómo se utilizará —por quién, cuándo, durante cuánto tiempo y con qué fines— para controlar los beneficios.⁷

La política de conservación natural vigente en el Cerrado brasileño no limita las áreas de expansión de la soja y el ganado. Según Eloy et al. (2016), las políticas de áreas protegidas, así como el Código Forestal brasileño, promueven una “política de selección”, mientras que los parques nacionales y las reservas forestales se establecen generalmente en áreas donde no hay posibilidad de expansión de la frontera agrícola. Por otro lado, las políticas de prevención de incendios forestales se aplican de forma exhaustiva, afectando directamente a la práctica productiva de la agricultura tradicional.

El Parque Nacional de la Fuente del Río Parnaíba es un ejemplo de las políticas detalladas por Eloy et al. (2016) y de los impactos socioeconómicos y ecológicos del extractivismo agrario en la región de Matopiba (Oliveira, 2018). La ubicación del parque es de especial relevancia ecológica, dado que alberga la cabecera del río Parnaíba —uno de los ríos más importantes de la región— y por su cercanía al

⁷ Según Veldwisch et al. (2018), la naturaleza fluida de la propiedad tiene enormes repercusiones en el acceso, la asignación, la reasignación, la distribución y la calidad del agua. Además, contribuye a procesos de acaparamiento controvertidos, que incluyen relaciones de poder desiguales, distinciones borrosas entre derechos formales e informales, límites administrativos poco claros, etc.

Jalapão, una importante zona de recarga para varias cuencas hidrográficas. La región es también el hogar de comunidades quilombolas que han vivido durante casi doscientos años en estos territorios en simbiosis con el medio ambiente (Oliveira y Sauer, 2020).

Desde la creación del Parque Nacional de los Manantiales del Río Parnaíba, las comunidades tradicionales (los comunes)⁸ cuentan cómo se han restringido sistemáticamente sus medios de producción y sus formas de vida. Se prohibió la quema controlada, el cultivo de palmeras y el pastoreo de animales dentro de las áreas protegidas; se penalizó la recogida de leña para uso doméstico (para cocinar). Estas medidas han dado lugar a controversias y tensiones entre las comunidades tradicionales y la gestión de los parques, con comunidades que denuncian la hostilidad mostrada hacia las formas de vida tradicionales y una clara preferencia (sin base legal) mostrada por la expansión de la soja (Oliveira, 2018).

Según algunos líderes quilombolas, estas comunidades han aprendido otras formas de defender sus medios de vida, ya que buscan alianzas en lugar de conflictos con los gestores del parque. Han cambiado sus formas de resistencia, combinando las reivindicaciones de sus derechos con acciones de conservación del medio ambiente. Antes, su lucha se basaba en protegerse de la violencia de los “grandes agricultores”. Ahora, se basa en la comprensión de sus derechos sobre la tierra, las normas (medioambientales) y las regulaciones del parque. Así, han cambiado su lucha y resistencia, pasando de basar los argumentos en el territorio a utilizar “el contenido del papel” y las leyes ambientales (Oliveira, 2018, p. 114).

Además, la autoidentificación o el autorreconocimiento como “comunidades tradicionales” ha desempeñado un papel importante

⁸ Las comunidades quilombolas son descendientes de esclavos africanos, a los que la Constitución brasileña reconoce sus derechos sobre los territorios que ocupan tradicionalmente. Forman parte de “pueblos y comunidades tradicionales”, grupos sociales que mantienen relaciones históricas y particulares con la tierra. Practican la agricultura tradicional y los pastos autóctonos, combinando técnicas de uso del fuego y de gestión estacional de la naturaleza. Estos sistemas son sostenibles, conservando la biodiversidad y los recursos hídricos durante siglos (Eloy et al., 2019, 2016).

en su resistencia. Tras un largo proceso de conflictos por el derecho a vivir en la tierra dentro del parque y a utilizar la biodiversidad en sus formas tradicionales de habitar y producir, las comunidades iniciaron los trámites para ser reconocidas formalmente como “comunidades quilombolas” por el Estado. Este estatus cuenta con garantías comunitarias tradicionales, al menos desde el punto de vista legal, que protege su territorio y sus derechos territoriales por la Constitución brasileña (Oliveira, 2018).

La gestión tradicional de la vegetación del Cerrado está estrechamente relacionada con las particularidades de su paisaje. Según Eloy et al. (2019), los sistemas de producción basados en el fuego tienen relaciones simbióticas con el entorno de la sabana. Los sitios húmedos cercanos a los caminos seguidos por los manantiales (llamados veredas) son manejados por un corte de llanura de inundación que proporciona protección temporal contra el desbordamiento. Estas zonas son lugares de suelos fértiles para la producción de alimentos y son los únicos sitios húmedos del paisaje. Las llanuras de altura, conocidas como chapadas, se utilizaban tradicionalmente como pastos para el ganado (uso común) y, ocasionalmente, era necesario reducir la presencia de biomasa mediante el fuego (Eloy et al., 2019). Así, mientras que las áreas protegidas por el Estado tienen la capacidad de conservar el medio ambiente, la gestión tradicional del paisaje en el bioma del Cerrado ofrece un enfoque más holístico para la preservación ecológica y la sostenibilidad (Eloy et al., 2016).

Sin embargo, durante la misma época en que se creó este parque nacional, en 2002, se produjo una intensa expansión del cultivo de soja en la Chapada das Mangabeiras, situada justo al sur del parque. Cuando estas mesetas fueron apropiadas por los intereses del agronegocio para el cultivo de la soja, las comunidades tradicionales se encontraron acorraladas y excluidas (Oliveira, 2018). En 2010, la zona presentaba altos índices de deforestación y las autoridades empezaron a inspeccionar una serie de grandes explotaciones, lo que acabó provocando la reducción del área protegida en 2015 (Oliveira, 2018).

En la literatura, estos procesos se tratan como “descenso de categoría, reducción y extinción de áreas protegidas” (Downgrading, Downsizing and Degazettement [PADDD]) para la conservación de la biodiversidad (Mascia y Pailler, 2011). *Downgrading* (descenso de categoría) se refiere a la flexibilización de las restricciones legales o a la desregulación de las actividades humanas dentro de un área protegida. *Downsizing* (reducción) se entiende como la reducción del tamaño o la extensión de un área protegida, resultante de un cambio legal en su tamaño o dimensión. *Degazettement* (extinción) es el proceso de pérdida total de la protección legal y la eliminación de un área protegida. Estos procesos están en curso en todo el mundo, y especialmente en Brasil, afectando áreas de conservación como el Parque Nacional estrechamente relacionadas con la expansión de la frontera agrícola o la construcción de infraestructuras (Fondo Mundial para la Naturaleza [WWF por sus siglas en inglés] Brasil, 2017).

Estos procesos se volvieron más comunes a finales de la década de 2000, con justificaciones comunes que incluyen la necesidad de generar energía y construir infraestructura. A partir de 2016, las narrativas hegemónicas defendieron explícitamente la expansión de las fronteras agrícolas para la producción de *commodities* de exportación (Sauer, 2018). Actualmente, alrededor del 10 % de los territorios bajo algún tipo de protección en Brasil están amenazados por el PADDD, lo que provocará la pérdida de biodiversidad en estas áreas protegidas. A menudo, las reducciones de estas áreas se han producido sin consultar a la sociedad civil (WWF Brasil, 2017).

El Parque Nacional de las Fuentes del Río Parnaíba es un claro ejemplo de “reducción” (*downsizing*), ya que sus límites fueron modificados por la Ley N.º 13 090 en 2015. Firmada por la entonces presidenta Dilma Rousseff, los cambios redujeron y desplazaron los límites del parque. La medida vino de la mano de la Bancada Rural en el Congreso Nacional, que actuó en defensa de los latifundistas de la región. El área total se redujo a 76 000 ha, legalizando el acaparamiento de tierras (ocupación ilegal) y creando espacio para la expansión de la soja en la parte sur del parque, a la vez que se compensaba

parte de la superficie perdida con una extensión hacia los territorios tradicionales (Oliveira, 2018).

Este proceso de “reducción” no incluyó, en ningún momento, consultas con las comunidades tradicionales afectadas. La sociedad civil de la zona que rodea el parque solo conoció los cambios después de la promulgación de la ley y, según el testimonio de los líderes locales, solo los grupos económicamente poderosos y los agronegocios tuvieron acceso a la propuesta de reducción; en consecuencia, las comunidades no participaron en el proceso de toma de decisiones (Oliveira, 2018).

Además de la pérdida de territorio y tierras comunales, las aguas subterráneas del parque nacional se contaminaron en este proceso. Los habitantes de las comunidades quilombolas de Curupá, Brejinhos, Macacos y Povoado do Prata —todas ellas cercanas al parque— cuentan que la mayoría de los manantiales que forman la cabecera del río Parnaíba se secaron o fueron contaminados (Oliveira, 2018). Según los líderes de Povoado do Prata, a partir de la década de 2000, el nivel de agua de los ríos que bordean las comunidades ha seguido bajando. Esto ha tenido consecuencias para el pastoreo tradicional (cría de ganado en libertad en las mesetas), dado que tenían que llevar a los animales a lugares cada vez más distantes en busca de agua.

De los ocho municipios impactados por el parque, hay claras desigualdades económicas y sociales que han surgido de los procesos de desarrollo, así como la expansión de los monocultivos se refleja en los índices de desigualdad y productividad social (Favareto, 2019). Formosa do Rio Preto,⁹ por ejemplo, en el estado de Bahía, fue el sexto mayor exportador de soja de Brasil en 2018 con una producción de 214 000 t de grano (IBGE, 2018). Sin embargo, según el Ministerio de Desarrollo Social (MDS, 2016), casi el 50 % de la población vive en la

⁹ Formosa do Rio Preto es una de las ciudades que fue blanco de la “Operación Lejano Oeste”, ya mencionada, durante la cual la Política Federal detuvo a jueces, latifundistas y traficantes de tierras involucrados en un esquema de acaparamiento de tierras que resultó en la apropiación de miles de hectáreas de tierras públicas y la expulsión de comunidades tradicionales de sus territorios (Camargo, 2019).

extrema pobreza, lo que señala el efecto concentrador del extractivismo agrario.

Sauer y França (2012) afirman que los cambios en el Código Forestal brasileño realizados en 2012 por el Congreso Nacional surgieron de la creencia de que la naturaleza representa un obstáculo para el desarrollo. Frente a esto, la lógica conservacionista afirmaba que las áreas para prácticas productivas debían mantenerse como parte de las medidas de conservación ambiental. Los ataques a las medidas conservacionistas se complementaron con el uso de leyes ambientales contra las poblaciones tradicionales, apuntando a los derechos y prácticas asociadas a los bienes comunes. La prohibición de prácticas productivas tradicionales —como el manejo del fuego o el uso común de las tierras de la meseta— sirven de ejemplo (Eloy et al., 2016).

Los esfuerzos políticos por flexibilizar las posturas judiciales respecto a la concesión de licencias ambientales también afectaron al Cerrado brasileño. La aplicación de las leyes ambientales ignoró numerosas convenciones internacionales sobre el clima ratificadas por el gobierno brasileño (Ramos, 2014).¹⁰ Más allá de la regularización del acaparamiento de tierras,¹¹ hubo una completa negación de los conflictos socioambientales en el proceso de concesión de licencias para proyectos y actividades a gran escala que eran efectiva o potencialmente contaminantes del medio ambiente (Sauer y França, 2012).

¹⁰ La implementación del Registro Ambiental Rural [CAR], instituido en 2012 y supervisado hasta 2019 por el Ministerio de Medio Ambiente, es un buen ejemplo. Más allá de que el gobierno de Bolsonaro cambió la gestión del programa poniéndolo en el Ministerio de Agricultura, a pesar de ser un sistema de autodeclaración de reservas y propiedades rurales, el CAR ha sido utilizado por los grandes propietarios para apropiarse de tierras comunales y públicas en sus declaraciones de reservas ambientales (Sauer, 2018; Sauer y França, 2012).

¹¹ La modificación de la Medida Provisional 910 en diciembre de 2019 permitió la regularización de las tenencias irregulares de tierras en todo el país, incluyendo las plantaciones irregulares de soja en áreas cercanas al parque. La flexibilización de las normas, más allá de permitir la titulación de las tierras acaparadas, ha dado lugar a un aumento de la deforestación, ya que la tala de la vegetación se considera una “acción productiva” y un criterio que demuestra la ocupación de la tierra (Sauer et al., 2019a; Leite et al., 2019).

Proyectos de ley similares que pretenden alterar la extensión o la categoría de las áreas protegidas también se han incluido en la agenda del gobierno de Bolsonaro. Desde mediados de 2016, el país asiste a un ataque sin precedentes contra las áreas protegidas. La ofensiva proviene en gran parte de los productores rurales a gran escala que han ocupado irregularmente estos terrenos, junto con las empresas mineras y los acaparadores de tierras públicas y comunitarias. Los posibles resultados de estos proyectos, como se ha señalado, incluyen la reducción del tamaño de estas áreas, además del nivel de protección del que gozan actualmente. En algunos casos, las zonas dejarán de estar protegidas por completo. Actualmente, el Congreso está estudiando una serie de proyectos de ley que prevén la modificación o la recategorización de estas superficies (Oliveira y Sauer 2020), permitiendo la apropiación privada de la naturaleza.

El acaparamiento de tierras y agua son los dos procesos que dan visibilidad al extractivismo agrario en la región de la frontera agrícola del Cerrado. Dichos procesos se sustentan en la economía del agronegocio con el objetivo de expulsar del territorio a las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas, además de eliminar o minimizar las áreas protegidas, para la producción a gran escala de soja destinada a la exportación. Los cambios en el uso de la tierra han provocado la degradación del medio ambiente —en particular, la reducción y contaminación de las reservas de agua— y conflictos por la tierra y el territorio (Oliveira y Sauer 2020).

Las comunidades están siendo expulsadas de los territorios tradicionalmente ocupados —las tierras comunales— y las prácticas tradicionales para mantener la biodiversidad están siendo criminalizadas (el uso del fuego, por ejemplo), mientras que los manantiales que alimentan los principales ríos de la región están contaminados. Sin embargo, estas actividades no han quedado sin respuesta, ya que las poblaciones tradicionales se están movilizándolo para defender sus derechos territoriales y sus medios de vida (Mançano Fernandes, 2019). El resultado no es solo una resistencia discursiva, sino enfrentamientos directos y desafíos al extractivismo agrario en Brasil.

Conclusiones

El extractivismo no es un fenómeno reciente en Brasil, sino que es un proceso bien conocido en toda América Latina. A partir de la colonización del continente y la prospección de los recursos naturales de Brasil, las actividades económicas de carácter extractivista se apropiaron de los recursos naturales a gran escala con el objetivo de fomentar un mercado de exportación. Se trata de un elemento fundamental en la ocupación y apropiación continua de América Latina, una característica que se renueva y revive constantemente. Esta tendencia se amplió aún más a raíz del “boom de las materias primas” de la década de 2000, pero una fuerte presencia del Estado en ese momento y la distribución de los beneficios a través de programas socioeconómicos proporcionaron una perspectiva novedosa a esta lógica de producción.

Esta tendencia de larga data de apropiación de los recursos naturales y de extracción del valor socioeconómico se caracteriza mejor como extractivismo agrario que como agricultura industrial, ya que el primer concepto encarna una explotación explícita de la tierra para obtener productos agrícolas destinados a la exportación, con poco o ningún beneficio para las sociedades o economías locales. En Brasil, desde mediados del siglo XX, este proceso ha contado con el apoyo y la profunda participación del sector del agronegocio, que ha construido su poder combinando las modernas inversiones de capital con las fuerzas agrarias conservadoras, en particular el poder político del latifundio y el “grilagem”, o acaparamiento de tierras, utilizando la complicidad del Estado para apropiarse de las tierras y los recursos naturales públicos y comunitarios.

La “Marcha hacia el Oeste” instigada por el gobierno brasileño en la década de 1940 —e impulsada aún más durante la dictadura militar en la década de 1960— trató al Cerrado como un terreno ideal para expandir las explotaciones ganaderas y el cultivo de cereales. La región fue imaginada como un “vacío poblacional” con vastas áreas

aptas para la agricultura mecanizada, lo que fomentó que el Cerrado fuera considerado como el entorno ideal para la expansión de la frontera agrícola, especialmente para el cultivo de soja. Las consecuencias han quedado claras desde entonces: el país se ha convertido en el segundo mayor exportador de soja del mundo, mientras que el Cerrado es uno de los biomas más amenazados de Brasil, con un 50 % estimado de su vegetación nativa ya deforestada.

La economía del agronegocio se sustenta, además, en aparatos judiciales, institucionales y mediáticos (como parte de las agroestrategias) que deliberadamente han reproducido narrativas que enmarcan la expansión de la frontera agrícola como necesaria y la apropiación de tierras como inevitable en este proceso de desarrollo. Estas narrativas apoyan las acciones emprendidas contra las comunidades tradicionales —al no reconocer sus derechos— y las áreas protegidas —mediante la reducción de su tamaño y la relajación de las protecciones legales—. También han dado lugar a las acciones emprendidas por la Bancada Rural en el Congreso Nacional, que representa la más reciente —y principal— expresión del extractivismo agrario en Brasil. El resultado ha sido la apertura de la tierra —incluso la que se posee ilegalmente o en procesos que incluyen el acaparamiento de tierras— para la producción y exportación de materias primas.

El Cerrado en general y la subregión de Matopiba en particular han estado profundamente marcados por la desigualdad social y económica. Esto ocurre, en primer lugar, porque son pocos los municipios que se benefician económicamente de la producción de monocultivos, ya que el control de la tierra, de las rentas de los recursos y de la plusvalía está muy concentrado, lo que significa que la mayoría de las ciudades del Matopiba no han experimentado ningún crecimiento económico como consecuencia de ello. En segundo lugar, el Matopiba se caracteriza por sus contradicciones, que incluyen una economía estimulada y la expansión de la frontera agrícola en algunos municipios, mientras que la pobreza extrema sigue afectando a la mayoría de la población.

Esta forma de extractivismo agrario en Brasil criminaliza las prácticas tradicionales de gestión de la biodiversidad (en general, empleando las leyes medioambientales), lo que se traduce en una pérdida de territorio y biodiversidad. Entre los problemas ambientales más graves denunciados por las comunidades tradicionales —incluso desde el interior de las áreas protegidas— se encuentran la continua escasez de agua y la contaminación de los recursos hídricos. Entre los efectos del extractivismo agrario, que avanza sobre los territorios dedicados a la protección del medio ambiente, se ubica la generación, exacerbado y empeoramiento de los conflictos socioambientales en la región. A pesar de que las comunidades tradicionales han protegido el medio ambiente en sus territorios tradicionales durante generaciones, se ven directamente afectadas por el rápido declive y la destrucción de los recursos naturales: agua, tierra y bosques. En algunas partes del Matopiba, el agotamiento de los recursos hídricos ha sido cuestionado y ha dado lugar a la creación de una resistencia a la agroindustria y a la expansión de la frontera agrícola. Sin embargo, las comunidades tradicionales, que durante siglos han ocupado estos territorios, están denunciando el modelo de extractivismo agrario e intentando reclamar sus territorios, así como su acceso y uso de las aguas y tierras comunales del Cerrado.

Bibliografía

Acosta, A. (2013). Extractivism and neoextractivism: two sides of the same course. En M. Lang y D. Mokrani (eds.), *Beyond Development: Alternative Visions from Latin America*. Amsterdam: TransNational Institute, TNI. www.tni.org/en/publication/beyond-development

Almeida, A. W. B. (2011). A reconfiguração das agroestratégias: novo capítulo da guerra ecológica. En S. Sauer y W. Almeida (eds.), *Terras e territórios na Amazônia: demandas, desafios e perspectivas* (pp. 27-44). Brasília: Editora da UnB.

ANA - Agência Nacional de Águas. (2018). *Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil 2018*. Brasília: ANA. <http://conjuntura.ana.gov.br/>

Baletti, B. (2014). Saving the Amazon? Sustainable soy and the new extractivism. *Environment and Planning A*, 46, 5-25.

Borras, S., J. Franco, S. Gómez, C. Kay, y M. Spoor. (2012). Land grabbing in Latin America and the Caribbean. *Journal of Peasant Studies*, 39 (3-4), 845-872.

Brazilian agriculture: The miracle of the cerrado (28 de agosto 2010). *The Economist* <http://www.economist.com/node/16886442>

Bruno, R. (2012). Movimento sou agro: marketing, habitus e estratégias de poder do agronegócio. En *Anais do 36º Encontro Anual da ANPOCS*. Águas de Lindóia, SP, octubre, 21-25 (por publicar).

Camargo, I. (23 de noviembre 2019). PF prende juiz em ação contra venda de sentenças para grilagem de terras na Bahia. *Site G1-BA and GloboNews*. <https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/11/23/pf-prende-juiz-em-desdobramento-de-operacao-que-afastou-presidente-e-mais-5-desembargadores-do-tj-da-bahia.ghtml>

Carvalho, H. M. (2013). A expansão do capitalismo no campo e a desnacionalização do agrário no Brasil. *Revista Reforma Agrária*, julio, 31-43. [Brasília, Associação Brasileira de Reforma Agrária [ABRA], edición especial].

Castro, L. F. P.; E. Hershaw y S. Sauer. (2017). Estrangeirização e internacionalização de terras no Brasil: oportunidades para quem? *Estudos internacionais*, PUC-MG, Belo Horizonte, 5 (2), 74-102.

Delgado, G. (2013). Economia do agronegócio (anos, 2000) como pacto do poder com os donos da terra. *Revista Reforma Agrária*, julio, 61-8. [Brasília, Associação Brasileira de Reforma Agrária [ABRA], Edición especial].

Eloy, L., C. Aubertin, F. Toni, S. L. B. Lúcio, y M. Bosgiraud. (2016). On the margins of soy farms: traditional populations and selective environmental policies in the Brazilian Cerrado. *The Journal of Peasant Studies*, 43 (2), 494-516, doi:10.1080/03066150.2015.1013099.

Eloy, L.; Schmidt, I. B.; Borges, S. L.; Ferreira, M. C. y dos Santos. T. A. (2019). *Seasonal fire management by traditional cattle ranchers prevents the spread of wildfire in the Brazilian Cerrado*. *Ambio*, 48, 890-899. <https://doi.org/10.1007/s13280-018-1118-8>

Epstein, G. A. (2005). *Financialization and the world economy*. Cheltenham: Edward Elgar.

Favareto, A. (2019). *Entre chapadas e baixões do Matopiba: Dinâmicas territoriais e impactos socioeconômicos na fronteira da expansão agropecuária no Cerrado*. São Paulo: Ilustre Edit & GreenPeace.

Fernandes, Min. Og. (2019). *Pedido de busca e apreensão criminal n.º 10-DF*. Inquérito 1 258/DF. Salvador: Superior Tribunal de Justiça e Ministério Público Federal, 30 de octubre. www.migalhas.com.br/arquivos/2019/11/decisao-og-fernandes-operacao-faroeste.pdf

Flexor, G., y S. P. Leite (2017). Land market and land grabbing in Brazil during the commodity boom of the 2000s. *Contexto Internacional*, 39 (2), 393-420.

Fondo Mundial para la Naturaleza Brasil [WWF-Brasil]. (2017). *Unidades de Conservação sob risco: ofensiva contra áreas protegidas abrange uma área quase do tamanho de Portugal*. Brasília: WWF-Brasil.

Franco, J., L. Mehta, y G. J. Veldwisch (2013). The global politics of water grabbing. *Third World Quarterly*, 34 (9), 1651-1675. doi: 10.1080/014336597.2013.843852.

Gryszpan, M. (2012). Origens e conexões norte-americanas do agribusiness no Brasil. *Revista Pós Ciências Sociais UFMA*, 9 (17). www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rpcsoc/article/view/987.

Gudynas, E. (2018). Development and nature: modes of appropriation and Latin American extractivisms. En J. Cupples, M. P. Schalscha, and M. Prietro (orgs.), *The Routledge Handbook of Latin American Development*. London: Routledge.

Gudynas, E. (2019). Hasta la última gota. *RevIISE - Revista De Ciencias Sociales y Humanas*, 13 (13), 15-31. www.ojs.unsj.edu.ar/index.php/reviise/article/view/323

Harvey, D. (2003). *O novo imperialismo*. 3ª edition. São Paulo: Loyola Press.

Hecht, S. B. (2005). Soybeans, development and conservation on the Amazon frontier. *Development and Change*, 36 (2), 375-395.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE]. (2017). *Censo Agropecuário 2017*. Rio de Janeiro: IBGE. www.ibge.gov.br.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE]. (2018). *Produção agrícola - lavoura temporária*. Bahia: Formosa do Rio Preto. cidades.ibge.gov.br.

Leite, A. Z., N. Tubino y S. Sauer (2019). Políticas públicas para terra e território: um olhar prospectivo sobre os próximos quatro anos no campo brasileiro. En *Brasil: incertezas e submissão?* (pp. 171-189). São Paulo: Fundação Perseu Abramo.

Mançano Fernandes, B. (2019). Land grabbing for agro-extractivism in the second neoliberal phase in Brazil. *Revista NERA*, 22 (50), 208-238.

Martins, J. S. (1996). O tempo da fronteira: retorno à controvérsia sobre o tempo histórico da frente de expansão e da frente pioneira. *Tempo Social: Revista de Sociologia da USP*, 8 (1), 25-70, São Paulo.

Martins, J. S. (2012). *Fronteira: a degradação do outro nos confins do humano*. São Paulo: Contexto.

Mascia, M. B., y S. Pailler. (2011). Protected area downgrading, downsizing and degazettement [PADDD] and its conservation implications. *Conservation Letters*, 4 (1), 9-20. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1755-263X.2010.00147.x/full>

McKay, B. M. (2017). Agrarian extractivism in Bolivia. *World Development*, 97, 199-211.

McMichael, P. (2018). Towards an ecology of development. En G. H. Fagan y R. Munck (orgs.), *Handbook on Development and Social Change*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome [MDS]. (2016). *Tabulador de dados do Cadastro Único*. Brasília: MDS. http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad/sobre_tabcad.php

Oliveira, G., y S. Hecht. (2016). Sacred groves, sacrifice zones and soy production: globalization, intensification and neo-nature in South America. *The Journal of Peasant Studies*, 43 (2), 251-285. doi:10.1080/03066150.2016.1146705.

Oliveira, K. R. A. (2018). *Fronteira agrícola e natureza: visões e conflitos no Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba*. Dissertação de mestrado, Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural [PPG-Mader], Universidade de Brasília, Brasília.

Oliveira, K. R. A. y S. Sauer (2020). A expansão da fronteira agrícola no Matopiba e seus impactos sobre unidades de conservação e comunidades quilombolas. En S. Guéneau, J. A. S. Diniz, y C. J. S. Passos (orgs.), *Alternativas para o bioma Cerrado: Agroextrativismo e uso sustentável da sociobiodiversidade* (pp. 165-200). Brasília: Mil Folhas, IEB.

Pereira, L. I.; L. D. Buscioli, C. F. Origuéla, J. Sobreiro Fo y B. M. Fernandes (2017). Disputas territoriais em Correntina-BA: territorialização do agronegócio, resistência popular e o debate paradigmático. *Boletim DataLuta, Nera - Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária*, 118. www.researchgate.net/publication/321149145_disputas_territoriais_em_correntina_-_ba_territorializacao_do_agronegocio_resistencia_popular_e_o_debate_paradigmatico

Ramos, A. (2014). Políticas públicas para áreas protegidas no Brasil. En *A Diversidade cabe na Unidade? Áreas protegidas no Brasil* (pp. 153-165). Brasília: IEB.

Sassen, S. (2014). *Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy*. Cambridge: Belknap Press, Harvard University Press.

Sauer, S. (2018). Soy expansion into the agricultural frontiers of the Brazilian Amazon: the agribusiness economy and its social and environmental conflicts. *Land Use Policy*, 79, 326-38.

Sauer, S. (2019). Rural Brazil during the Lula administrations: agreements with agribusiness and disputes in agrarian policies. *Latin American Perspectives*, 46 (4), 103-121, <http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0094582X16685176>

Sauer, S., A. Z. Leite, K. Oliveira y A. Shankland. (2019). The implications of closing civic space for sustainable development in Brazil. *IDS and Act Alliance*, mimeo. doi:10.13140/RG.2.2.31480.90885.

Sauer, S. y S. (Jun) Borras Jr. (2016). “Land grabbing” e “green grabbing”: Uma leitura da “corrida na produção acadêmica” sobre a apropriação global de terras. *Campo-Território: Revista de Geografia Agrária*, 11 (23), 6-42.

Sauer, S. y F. C. Franca (2012). Código Florestal, função socioambiental da terra e soberania alimentar. *Caderno CRH*, 25 (65), 285-307.

Sauer, S. y L. F. P. Castro. (2020). Land and territory: struggles, for land and territorial rights in Brazil. En O. De Schutter y R. Balakrishnan (eds.), *Property Rights from Below: Commodification of Land and the Counter-Movement* (pp. 113-130). New York: Routledge.

Sauer, S. y S. P. Leite (2012). Agrarian structure, foreign investment in land, and land prices in Brazil. *Journal of Peasants Studies*, 39 (3-4), 873-898.

Sauer, S., y G. Mészáros (2017). The political economy of land struggle in Brazil under workers’ party governments. *Journal of Agrarian Change*, 17 (2), 397-414.

Sauer, S., N. Tubino, A. Z. Leite y G. Carrero (19 de diciembre 2019a). MP 910: a grilagem de terras é ilimitada e incentiva o desmatamento. *VioMundo*. www.viomundo.com.br/voce-escreve/quatro-especialistas-em-questao-agraria-mp-910-objetiva-a-grilagem-ilimitada-de-terras-publicas-e-desmatamento-de-grandes-areas.html

Svampa, M. (2019). *Las fronteras del neoextractivismo en América Latina: conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias*. Bielefeld: Bielefeld University Press. <https://doi.org/10.14361/9783839445266>.

Veldwisch, G. J.; J. Franco y L. Mehta (2018). Water grabbing: practices of contestation and appropriation of water resources in the

context of expanding global capital. En R. Boelens, T. Perreault, and J. Vos (orgs.), *Water Justice*. Cambridge and New York: Cambridge University Press.

Veltmeyer, H. y E. Zayago Lau (2019). America Latina en el vórtice del capital extractivo y de la resistência. En S. Sauer (ed.), *Desenvolvimento e transformações agrárias: BRICS, competição e cooperação no Sul Global* (pp. 45-70). São Paulo: Outras Expressões.

World Bank. (2010). *Rising Global Interest in Farmland: Can It Yield Sustainable and Equitable Benefits?* Washington D. C.: World Bank. siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/ESW_Sept7_final_final.pdf